



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Mar del Plata, 22 de mayo de 2026

VISTO:

El expediente **FMP 12076/2025/CA1**, del registro de la Secretaría Penal de esta Cámara Federal de Apelaciones, caratulado "**Salvatore Negocios Gastronómicos SA en formación**", proveniente del Juzgado Federal 1 de Mar del Plata, Secretaría Penal Actuaciones.

Y CONSIDERANDO:

El Dr. Eduardo Pablo Jiménez dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento del suscripto en razón del recurso de apelación interpuesto por el representante legal de la ARCA-DGI, contra el interlocutorio del 18/08/2025 en cuanto resolvió declarar mal denegado el recurso de apelación judicial interpuesto por la apoderada de la contribuyente "Salvatore Negocios Gastronómicos SA", contra la Resolución N° 26/2025 de ARCA en el marco del Sumario SEFI N° 361182-CAT, haciendo lugar a la queja interpuesta (conf. art. 25 bis de la Ley 19.549, incorporado por la Ley 27.742 en función del el art. 77 de la Ley 11.683 y art. 8.1 de la CADH), disponiendo la devolución de las actuaciones al ente recaudador, a efectos que se continuara la tramitación.

Los hechos. La resolución recurrida

El presente guarda concordancia con la cuestión debatida en el marco del FMP 12073/2025 caratulado "CONTRIBUYENTE: SALVATORE NEGOCIOS GASTRONÓMICOS EN FORMACIÓN S.A. s/INFRACCION LEY 11.683 DENUNCIANTE: ARCA", en donde propuse al Acuerdo confirmar el interlocutorio atacado, correspondiendo aplicar la misma solución al presente caso.

Allí consideré que el Organismo recaudador consideró inadmisibile por extemporáneo el recurso impetrado por la contribuyente contra la Resolución Administrativa N° 27/2025 (DI RMDP), resolución que fue recurrida mediante

Fecha de firma: 22/05/2026

Alta en sistema: 26/05/2026

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: FRANCISCO MANUEL PEREYRA, SECRETARIO



#40275389#502892905#20260522100147563

apelación judicial por el administrado fundado en lo dispuesto por el artículo 25 bis de la Ley 19.549, incorporado por la Ley 27.742, y en concordancia con lo previsto en el artículo 77 segundo y tercer párrafo de la Ley 11.683.

El juez de la instancia anterior entendió que el principio de especialidad invocado por el organismo recaudador, sustentado en el artículo 77 de la Ley 11.683 —que prevé un plazo de 5 días para la interposición del recurso judicial ante el Juzgado Federal— no resulta acertado cuando existe una norma posterior con vocación derogatoria expresa, resultando entonces aplicable al caso el artículo 25 bis de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, incorporado por el art. 44 de la Ley 27.742 (B.O. 08/07/2024).

Los agravios de la ARCA-DGI

Al igual que en el caso citado, el representante legal del Fisco cuestiona que el Magistrado haya resuelto aplicar al caso el artículo 25 bis de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por sobre lo dispuesto por la ley especial que rige en el procedimiento tributario (Ley 11.683) y que contempla un plazo de 5 días hábiles para recurrir (art. 77), en vez de los 30 días que prevé el 25 bis de la Ley 19.549.

Considera aplicable al caso el principio general del derecho por el cual, ente dos normas vigentes y de igual jerarquía, prima la ley especial por sobre la ley general. Aplicar los plazos de la Ley 19.549 implicaría, además, vulnerar el artículo 116 de la ley tributaria y vaciar de contenido al régimen especial sin ninguna declaración legislativa expresa, recordando que en materia tributaria rige el principio de reserva de ley.

La réplica formulada por la contribuyente y la opinión de la Fiscalía General

La defensa sostiene que el recurso se interpuso en tiempo propio atento lo normado por el art. 25 Bis de la Ley 19.549 conforme Ley 27.742 que resulta de plena





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

aplicación al caso, que deroga toda norma especial, por lo cual no son atendibles los agravios del Fisco.

La especialidad alegada respecto de la Ley 11.683 no puede nunca ser excusa para desplazar el piso de tutela de la LNPA, menos cuando la voluntad derogatoria de todas las leyes especiales surge expresa. El legislador consolidó un régimen que prima sobre los microsistemas especiales cuando están en juego los derechos y garantías de los administrados.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal considera que, a partir del análisis normativo y las cuestiones valoradas por el a quo, debe confirmarse la decisión de la instancia anterior.

Ello por cuanto, si bien como regla la ley general posterior no deroga de pleno derecho la ley especial anterior, en este caso se da un supuesto de excepción, en tanto la nueva ley general específicamente prevé dejar sin efectos los plazos menores que puedan estar previstos por otras leyes especiales. Ya sea considerarlo como una derogación expresa, a partir de la referencia general realizada por la nueva ley, o una derogación tacita, por incompatibilidad con las nuevas disposiciones, resulta clara la disposición del legislador de unificarla imponiendo un plazo mínimo.

La opinión del suscripto

Habiendo efectuado un análisis de la cuestión traída a debate y las posturas de las partes intervinientes, entiendo que el interlocutorio cuestionado por el Fisco debe ser confirmado debiendo declararse mal denegado el recurso de apelación judicial interpuesto por la contribuyente y, en consecuencia, devolverse las actuaciones a la instancia administrativa a efectos que se continúe con la tramitación del remedio procesal impetrado.

Para así decidir tengo presente que el art. 25 bis de la Ley 19.549 establece —en lo que al presente interesa— que “Cuando en virtud de norma expresa la impugnación



judicial del acto administrativo deba hacerse por vía de recurso, el plazo para deducirlo será de treinta (30) días hábiles judiciales desde la notificación de la resolución definitiva que agote la instancia administrativa. Quedan derogadas todas las prescripciones normativas especiales que establezcan plazos menores” (art. incorporado por art. 44 de la Ley N° 27.742 B.O. 8/7/2024).

En función de ello y atento a lo dispuesto por el legislador en el art. 77 de la Ley 11.683 “Las sanciones de clausura y de suspensión de matrícula, licencia e inscripción en el respectivo registro, cuando proceda, serán recurribles dentro de los cinco (5) días por apelación administrativa ante los funcionarios superiores que designe la Administración Federal de Ingresos Públicos, quienes deberán expedirse en un plazo no mayor a diez (10) días” y que “La resolución a que se refiere el párrafo anterior será recurrible por recurso de apelación, ante los juzgados en lo penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los juzgados federales del resto de la República” debiendo el escrito “...ser interpuesto y fundado en sede administrativa, dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución...” (art. sustituido por art. 213 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017), la interpretación efectuada por el a quo deviene ajustada a derecho.

El artículo 25 bis, está dedicado “...a regular aspectos centrales de los denominados recursos directos. Cabe entender por tales a los remedios especialmente previstos en determinados regímenes sectoriales para la impugnación judicial de los actos administrativos emitidos en su marco. Como se sabe, en nuestro país –en especial en el ámbito federal– no existe una ley marco regulatoria de la totalidad de los recursos directos. Más bien, nos encontramos con una infinidad de leyes sectoriales dispersas en las que se prevén distintos recursos directos para la impugnación judicial de los actos dictados en su marco. Además, la regulación de los remedios contenida en aquellas leyes sectoriales es absolutamente diversa, no solo en cuanto a la denominación que se les asigna, sino, también, en lo que hace a los aspectos procesales regulados en cada caso...” (Stupenengo, Juan Antonio; “Los recursos directos en la Ley Nacional de





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Procedimientos Administrativos modificada”. Ver en “Bases para la Libertad en el Derecho Administrativo Argentino” - Tomo Celeste / Enrique Alonso Regueira ... [et.al.] 1a. edición - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 2024, págs. 373/374). Entre esos recursos se encuentra el establecido en el art. 77 de la Ley de Procedimientos Tributarios.

En función de ello, si bien es principio reconocido que la ley general no deroga a la ley especial anterior, ello es así siempre y cuando no medie expresa abrogación o manifiesta incompatibilidad entre ellas (Fallos: 319:2594; 315:1274), como ocurre en el caso bajo estudio en donde la norma expresamente deroga todas las prescripciones normativas especiales que establezcan plazos menores, por lo cual el agravio blandido por el Fisco no puede ser receptado favorablemente.

Consecuentemente, siendo que los jueces no están obligados a seguir todos y cada uno de los agravios expresados, sino a atender a aquellos que estimen conducentes para resolver la cuestión debatida (Fallos: 311:340; 322:270; 329:3373; 331:2077), en razón de los argumentos informados, propongo al Acuerdo CONFIRMAR el auto cuestionado debiendo continuar las actuaciones según su estado.

Tal el sentido de mi voto.

El Dr. Alejandro Osvaldo Tazza dijo:

Expuestas por mi distinguido colega las circunstancias de hecho y de derecho que fundamentan su decisión, debo manifestar que he de adherir a la solución propuesta, siendo que la misma es conteste con los antecedentes de la causa y conforme la opinión del suscripto.

En tal sentido, comparto que, a partir de la incorporación del art. 25 bis a la Ley 19.549 por la Ley 27.742, resulta aplicable el plazo de treinta días hábiles judiciales



para la interposición del recurso, quedando desplazados los plazos menores previstos en normas especiales.

En consecuencia, los agravios del organismo recaudador no pueden prosperar, correspondiendo declarar mal denegado el recurso de apelación judicial. Por ello, voto por CONFIRMAR la resolución apelada.

Tal es mi voto.

En virtud del acuerdo que antecede, este Tribunal **RESUELVE:**

NO HACER LUGAR a la apelación y **CONFIRMAR** la resolución del juez de grado del 18 de agosto de 2025 en cuanto resolvió declarar mal denegado el recurso de apelación judicial interpuesto por la apoderada de la contribuyente “Salvatore Negocios Gastronómicos SA”, contra la Resolución N° 26/2025 de ARCA en el marco del Sumario SEFI N° 361182-CAT, haciendo lugar a la queja interpuesta (conf. art. 25 bis de la Ley 19.549, incorporado por la Ley 27.742 en función del el art. 77 de la Ley 11.683 y art. 8.1 de la CADH), disponiendo la devolución de las actuaciones al ente recaudador, a efectos que se continuara la tramitación.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

